

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de Julio de 1998 (B.O.E. de 14-7-98), ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, salvo cuando la resolución tenga una cuantía superior a 10 millones de pesetas, en que podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; todo ello conforme a lo establecido en los artículos 8.3 y 10.1j) de la Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Director Provincial. Manuel Cerdá Ferrer.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

RESOLUCION DE FECHA 07 02-2001

2698.-D. VICENTE GIMENO CERDAN/C. Gran Capitán, n° 25, 52001 MELILLA. En relación con la nota interior remitida por la Unidad de Recaudación Ejecutiva n° 12/01 de Castellón de fecha 23-01-2001, por la que nos solicita la anulación por prescripción de parte de la deuda que Ud. mantiene con la Seguridad Social y en base a los siguientes.

HECHOS

PRIMERO.- La Unidad de Recaudación Ejecutiva 12/01, de Castellón, sigue procedimiento administrativo de apremio contra D. VICENTE GIMENO CERDAN, por débitos al Sistema de la Seguridad Social Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por los períodos de 01/88 a 12/99, y de 10/93 a 07/94 en el Régimen General, en virtud de los cuales el Recaudador Ejecutivo procedió a la tramitación del correspondiente expediente administrativo de apremio, embargando con fecha 02-10-92, el inmueble urbana destinado a vivienda en el término municipal de Benicasim y Registrado en el Folio -157, Tomo 829 Libro 237 y Finca registral 6.252 del Registro de la Propiedad n° 3 de Castellón. Dicho embargo se prorrogó por mandamiento de fecha 17-04-96, y notificado mediante publicación en el B.O.P. n° 66 de

30-05-96 y rectificación de errores en el B.O.P. n° 83 de 09-07-96 al ser devuelta la notificación por correo certificado por desconocido. Dicho embargo y su prórroga se realizaron por la deuda de autónomos desde 01/88 a 12/90, y han sido cancelados, como consecuencia de los autos de juicio ejecutivo 1884/93-A seguidos en el Juzgado de 1ª instancia n° 4 de Zaragoza para hacer efectivo un embargo de rango preferente.

SEGUNDO.- Con fecha 31-10-2000, la Recaudadora Ejecutiva de la U.R.E. 12/01 de Castellón, presenta informe sobre el citado expediente, en el que relaciona varias certificaciones de descubierto correspondientes a la deuda de los años 91, 92 y 93 de Autónomos y de 01/92 a 02/94 de General, las cuales se notificaron después del cargo en U.R.E., la última de ellas el 28-02-95, sin que posteriormente se haya realizado actuación alguna puesta en conocimiento del deudor, por lo que dichas certificaciones de descubierto están prescritas.

TERCERO.- Por resolución de esta Dirección Provincial de 15-11-2000, se produjo la anulación por prescripción de las Certificaciones de Descubierto que figuraban en el anterior informe. Con fecha 23-01-2001, la Recaudadora Ejecutiva de la U.R.E. 12/01 de Castellón, presenta nuevo informe sobre el citado expediente, como consecuencia de la modificación sobre la prescripción efectuada por la Ley 14/2000 de 29 de Diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, en el que relaciona la Certificaciones de Descubierto y Providencias de Apremio que han ganado prescripción en aplicación de la citada ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El art. 21 de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por R.D.L 1/1994 de 20 de junio, en su nueva redacción dada por la Ley 14/2000 de 29 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (B.O.E. 30-12-2000), establece que la obligación de pago de aquellas deudas cuyo objeto este constituido por recursos que tengan el carácter de cuotas de la Seguridad Social prescribirá a los cuatro años a contar desde la fecha en que finalice el plazo reglamentario de ingreso de las mismas, indicando, a su vez el punto 4 del art. 47 del Reglamento